



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

**SENTENCIA DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE NRO: 9156/2015**

**AUTOS: “FLORES AZUCENA DEL SOCORRO c/ MINISTERIO TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Buenos Aires,

**AUTOS Y VISTOS:**

Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 155/168 contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de Fiscalización del MTEySS, obrante a fs. 146/150 que impuso una multa al quejoso, en virtud de las infracciones cometidas al artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683.

Que notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 10 inc. b) de la Resolución METySS N ° 655/05 y sus modif.. Así, habiendo sido interpuesto en tiempo y cumplido con el depósito previo de la deuda conforme obra en la boleta corriente a fs. 45 corresponde la apertura de esta instancia.

El presente se origina en el relevamiento realizado en el domicilio comercial de la actora en donde se registra una persona realizando tareas propias del giro comercial sin la debida registración. Asimismo dicha persona informó fecha de ingreso, horario y remuneración percibida; todo lo cual con posterioridad a la formulación del descargo concluye con la resolución en discusión.

La apelante plantea, en primer término, la nulidad del acta de origen sobre la base de la inobservancia de la totalidad de los requisitos del acto administrativo, a saber, causa, motivación y ausencia de dictamen jurídico, en segundo término, ya sobre la cuestión en debate, señala que la persona apuntada como trabajadora de la empresa, se encontraba en el local "por cuestiones de amistad y acompañamiento" y que sus declaraciones se corresponderían al "nerviosismo y susto por la actitud arbitraria y autoritaria de los encargados del relevamiento".

Que, en orden a la cuestión debatida en estas actuaciones, en primer término cabe señalar respecto a la falta de causa y motivación que la dependencia ministerial,



se encuentra facultada para determinar las sanciones controvertidas al constatarse hechos y circunstancias ciertas establecidas en la normativa aplicable, ello así a partir de lo previsto por el artículo 36 de la ley 25.877 que autoriza al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a verificar y fiscalizar en todo el territorio nacional, el cumplimiento por parte de los empleadores de la obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, que integran el Sistema Único de la Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades concurrentes con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En este contexto, es dable recordar que las nulidades sólo resultan oponibles en la medida que coloquen al administrado o responsable en una situación de indefensión o que obstruyan la normal tramitación del procedimiento administrativo, y no resulta razonable la nulidad peticionada si el apelante pudo ejercer su derecho de defensa, ya que tuvo pleno conocimiento de las actuaciones administrativas, así como la posibilidad de fundar los argumentos que justificarían su posición tanto en sede administrativa como judicial.

No obstante lo señalado, la ausencia de dictamen jurídico requiere un análisis mas profundo, ello así, por cuanto dentro del conjunto de funciones públicas, aunque de manera limitada o restringida, la administración puede ejercer la función jurisdiccional, resolviendo controversias o conflictos por medio de actos que, en ciertas circunstancias y bajo determinadas condiciones, se asemejan, por su régimen jurídico y efectos, a los típicos actos que expresan el ejercicio de la función de juzgar, cuya competencia constitucional ha sido adjudicada al órgano judicial (arts. 109, 116 y 117 de la Constitución Nacional).

El artículo 7º, inciso d, de la ley 19.549 establece que antes de la emisión de un acto administrativo deben cumplirse los procedimientos sustanciales previstos en el ordenamiento jurídico, aun cuando esos procedimientos tuvieran carácter implícito. La norma también dispone que, sin perjuicio de lo que regulen otras normas especiales, resulta "esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos". Asimismo, el artículo 14, inciso b, de la ley citada establece que son nulos de nulidad absoluta los actos dictados en violación a la ley aplicable o a las formas esenciales.

Tales disposiciones rigen la generalidad de los procedimientos realizados ante la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada (artículo 1º de la ley citada), entre los cuales deben considerarse incluidos los que lleva adelante la inspección en el marco del Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social creado por la ley 25.877.

El requisito del dictamen del servicio jurídico permanente contemplado en el artículo 7º, inciso d, de la ley 19.549, en palabras de la C.S.J.N., hace a la juridicidad de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

la actuación administrativa y debe ser cumplido antes de que la Administración exprese su voluntad (Fallos: 301:953, “Duperial”, entre muchos otros).

Respecto a las restantes cuestiones alegadas, que no fueron expresamente mencionadas, se omite formular juicio alguno por considerarlas inconducentes para la solución del conflicto suscitado en autos. En tal sentido el Alto Tribunal ha señalado que “los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino sólo aquellas que se estimen decisivas para la correcta solución del litigio y el fundamento de sus conclusiones” (CS, nov 4/97 “Wiater c/Min. de Economía”, LA LEY, 1998-A, 281). De esta suerte se reitera una doctrina expuesta en múltiples ocasiones, merced a la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que a su juicio, no sean decisivos (Fallos: 272:225; entre otros).

Por el ello el Tribunal **RESUELVE**: 1) declarar formalmente admisible el recurso deducido y hacer lugar al mismo; 2) declarar la nulidad de la resolución dictada de conformidad a lo expresado en los considerandos precedentes y ordenar la devolución de las sumas ingresadas en cumplimiento de depósito previo con más el interés que resulte de aplicar la tasa pasiva para el uso de la justicia; y 3) Costas por su orden en la Alzada (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.N.).

Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

**SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOCALIA 1 SE ENCUENTRA VACANTE (ART. 109 del R.J.N)**

